

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	GLORIA LILIANA GÁLVEZ LONDOÑO
DEMANDADOS	COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.
RADICADO	05001-31-05-012-2020-00300-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Ineficacia del acto de traslado de régimen pensional
DECISIÓN	Confirma

Medellín, veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **GLORIA LILIANA GÁLVEZ LONDOÑO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** y la **AFP PROTECCIÓN S.A.**

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 038**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, decidir los recursos de apelación interpuestos por los apoderados judiciales de COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A., contra la sentencia que profirió el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, en la

audiencia pública celebrada el día 25 de mayo de 2022; y a su vez conocer dicha sentencia en Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, de conformidad al artículo 69 del CPT y SS.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que, la demandante, quien nació el 27 de agosto de 1964, se afilió al régimen de prima media con prestación definida administrado por el entonces Instituto de los Seguros Sociales en el mes de mayo de 1994; posteriormente se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, desde el mes de agosto de 1995 a través de la AFP PROTECCIÓN S.A., donde permanece actualmente, y cuenta con más de 55 años de edad.

Se duele que el asesor ejecutivo del RAIS no le brindó la información suficiente para haber tomado la decisión pertinente con la información determinante y ajustada a su situación concreta; y que, al contrario, le ocultaron información relevante al momento de ser atendida para afiliarse a la AFP PROTECCIÓN S.A., por lo que considera que su decisión se encuentra viciada y afectada en su validez, por ausencia del conocimiento sobre las consecuencias jurídicas de su traslado de régimen pensional.

Manifestó que, con las proyecciones pensionales que le fueron presentadas, su pensión resulta abiertamente deficitaria en el RAIS, respecto a la que le hubiere correspondido de haber permanecido en el régimen de prima media con prestación definida, y por tal motivo ha solicitado a las codemandadas su retorno al régimen de prima media con prestación definida, pero las peticiones presentadas en este sentido, han sido resueltas en forma negativa, quedando así agotada la reclamación administrativa ante COLPENSIONES.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que se declare la ineficacia y/o nulidad del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad adelantado por PROTECCIÓN S.A., y que en consecuencia, se ordene a dicha administradora

trasladar a COLPENSIONES la totalidad de las cotizaciones, rendimientos y cuotas de administración, debiendo ordenar a esta última entidad recibir dichas sumas y aceptar a la demandante GLORIA LILIANA GÁLVEZ LONDOÑO en el régimen de prima media con prestación definida sin solución de continuidad, condenando a ambas demandadas a reconocerle las costas procesales del juicio, y a lo que ultra y extra petita resulte acreditado.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Una vez admitida la demanda, fue debidamente notificada, procediendo las demandadas, a dar respuesta a la misma, a través de sus respectivos apoderados judiciales.

COLPENSIONES describió el traslado de esta acción, según escrito visible en el archivo PDF N° 6 incorporado en el expediente digital.

A través del mismo, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de esta acción; aceptó únicamente la afiliación de la demandante al extinto ISS donde apenas cotizó un total de 12,86 semanas, su edad, el traslado de régimen pensional, y el agotamiento de la reclamación administrativa, sin que le consten los restantes supuestos fácticos los cuales deberán ser objeto de debate probatorio en la litis, y; propuso las excepciones perentorias que denominó: *“IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE DECLARAR LA NULIDAD O INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA AL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD; PRESCRIPCIÓN; COMPENSACIÓN, BUENA FE; INNOMINADA O GENÉRICA; E IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS”*.

PROTECCIÓN S.A. hizo lo propio (fls. 3 y ss. del archivo PDF N° 07 del expediente digital), negando en su mayoría los hechos de la demanda, salvo la afiliación de la demandante, su edad y la reclamación elevada a la entidad, se opuso a las pretensiones de la demanda y, formuló las excepciones de fondo que denominó *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y FALTA DE CAUSA PARA PEDIR, BUENA FE, PRESCRIPCIÓN, APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES, RECONOCIMIENTO DE RESTITUCIÓN MUTUA EN FAVOR DE*

LA AFP: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN CUANDO SE DECLARA LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN POR FALTA DE CAUSA, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER LA PRIMA DEL SEGURO PREVISIONAL CUANDO SE DECLARA LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN POR FALTA DE CAUSA Y PORQUE AFECTA DERECHOS DE TERCEROS DE BUENA FE y la INNOMINADA O GENÉRICA”.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública celebrada el 25 de mayo de 2022, la Juez de conocimiento accedió a las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a través de PROTECCIÓN S.A., y le impuso la obligación de trasladar a COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, el valor de la cuenta de ahorro individual de la asegurada GLORIA LILIANA GÁLVEZ LONDOÑO, incluyendo cotizaciones, rendimientos, gastos de administración, porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima y primas previsionales de invalidez y sobrevivencia, debidamente indexados al momento del traslado, y con cargo a sus propios recursos, y con el detalle pormenorizado de los conceptos objeto de la devolución.

A COLPENSIONES le ordenó aceptar el retorno de la demandante, recibir las mencionadas sumas, activar su afiliación a prima media sin solución de continuidad, actualizando su historia laboral.

Condenó en costas procesales únicamente a PROTECCIÓN S.A., absteniéndose de hacerlo frente a COLPENSIONES.

El principal argumento de la A quo para declarar la ineficacia, desarrolló toda la tesis jurisprudencial que en la actualidad sostiene la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, sobre la inversión de la carga de la prueba, la insuficiencia del formulario para acreditar asesoría, la relevancia de la oportunidad en que se reciba la asesoría, la imposibilidad de que la ineficacia se sanee por prescripción o por traslados en el mismo régimen de ahorro individual con solidaridad y el derecho a la libre selección de régimen pensional.

VI. – RECURSOS DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sentencia de primera instancia fue apelada por los apoderados judiciales de las entidades demandadas PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES.

Apelación de PROTECCIÓN S.A.: Su disenso con la sentencia de primera instancia fue parcial, oponiéndose a la orden de trasladar las cuotas de administración y las primas previsionales, expresando que se trata de sumas que se encuentran autorizadas deducir por el legislador en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y constituyen descuentos que existen en ambos regímenes pensionales.

Hizo mención a la prueba de los rendimientos generados en favor del demandante, insistiendo en la buena gestión adelantada por PROTECCIÓN S.A. y expresó que, mantener la orden de devolución de las cuotas de administración generaría un enriquecimiento sin causa en favor de COLPENSIONES, ya que dicha entidad estaría recibiendo una comisión que ni siquiera tiene por destino financiar la pensión de vejez del asegurado, de lo que concluye que PROTECCIÓN S.A. tiene derecho a conservar la comisión de administración como una restitución mutua, ya que se estarían trasladando los respectivos rendimientos al régimen de prima media con prestación definida, además esta devolución de conjunta ordenada por la a quo, debe ser entendida como una condena a perjuicios, misma que no está solicitada en la demanda, ni tampoco hizo parte de la fijación del litigio.

Indicó que PROTECCIÓN S.A. pagó en su momento las primas previsionales a las respectivas aseguradoras, generando cobertura en favor de la demandante frente a los riesgos de invalidez y sobrevivencia, por lo que dicha entidad estaría imposibilitada para recobrar dichas sumas ya pagadas frente a esos terceros de buena fe que nada tuvieron que ver con la ineficacia.

Finalizó manifestando que los descuentos realizados no tienen la finalidad de sustentar el pago o financiación de la pensión de vejez del actor, por lo que solicitó que se declare la prescripción de trasladar dichos rubros.

Apelación de COLPENSIONES: La entidad únicamente recurrió lo relativo a la declaratoria de ineficacia del acto jurídico de traslado entre regímenes pensionales, al considerar que la conducta desplegada por la afp accionada durante el proceso de afiliación y/o traslado del demandante, deben ser valorada bajo la normatividad que se encontraba vigente en ese momento, pues no puede perderse de vista que todas las obligaciones relacionadas con el deber objetivo de información que les incumbe a los fondos privados, han sido producto de un desarrollo normativo que inició con la Ley 100 de 1993, y se ha ido consolidado con los Decretos expedidos en los últimos años.

Alegatos de Conclusión:

En la debida oportunidad procesal, la apoderada judicial de COLPENSIONES, presentó sus alegatos de conclusión, señalando en relación a la pretensión de declarar la nulidad o ineficacia del traslado y reactivar la afiliación al régimen de prima media con prestación definida, se tenga presente lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, el cual se ve afectado con la declaración injustificada de la ineficacia del traslado, poniéndose en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados.

Insiste en la buena fe de Colpensiones, quien simplemente fue un tercero ajeno al contrato celebrado entre la señora Gloria Liliana Gálvez Londoño y la AFP PRIVADA, por lo que en el hipotético caso de confirmarse la declaratoria del acto jurídico de traslado, debe entregarse a Colpensiones la totalidad de los valores cotizados y/o depositados en la cuenta de ahorro individual de la demandante, tales como cotizaciones, bonos pensionales, títulos pensionales, rendimientos, intereses y cualquier otro concepto a consideración del despacho.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, se pasa a resolver de fondo, previas las siguientes

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica procesal, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión.- La Ineficacia en el traslado de régimen pensional.-

El objeto central de esta Litis, se extiende a los puntos objeto de inconformismo planteados por los apoderados judiciales de PROTECCIÓN S.A., y COLPENSIONES en sus respectivos recursos de apelación; sin embargo, esta Sala se encuentra facultada para revisar todos los aspectos de la condena a Colpensiones relacionada con la declarada ineficacia de traslado de régimen pensional y la aceptación de la demandante en el régimen de prima media con prestación definida que administra, en virtud de la competencia de que se dispone conforme al artículo 69 del CPT y SS., en Grado Jurisdiccional de Consulta.

Partirá la Sala de establecer si el traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, que realizó la demandante, a través de la AFP PROTECCIÓN S.A. alcanzó o no a producir los efectos jurídicos respectivos.

Sea lo primero referir que la libre escogencia de régimen pensional y el traslado entre regímenes que en tal virtud se efectúe, tiene como presupuesto esencial, el absoluto conocimiento del asegurado sobre las consecuencias jurídicas que se puedan derivar del cambio de régimen pensional, el cual ha de venir suministrado y garantizado por el agente adscrito al respectivo fondo, esto es, es de la propia esencia del acto de traslado, el suministro cabal y absoluto de toda la información, incluyendo el asesoramiento sobre todas las implicaciones pensionales y consecuencias que para el caso concreto pueden

darse, ya que se trata de una decisión relevante de la cual depende el futuro pensional del asegurado.

Esto lleva a la Sala a advertir que las obligaciones de asesoría no fueron creadas por el Legislador a través de recientes normas, sino que desde la propia concepción dualista de dos regímenes pensionales a través de la Ley 100 de 1993, se establecieron como de su propia esencia.

Así, la asesoría a cargo de la administradora, se erige en una obligación insoslayable, teniendo en cuenta la trascendencia e importancia de los efectos económicos que puede representar una decisión de tal naturaleza.

En términos generales, es preciso referir que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha venido desarrollando la tesis sobre la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, y a través de las sentencias SL 1452 del 3 de abril de 2019 y SL 1688 del 8 de mayo de 2019, ha consolidado su línea jurisprudencial, la cual venía desarrollándose –en su orden- a través de las Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008, SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del 27 de septiembre de 2017, y SL 17.595 del 18 de octubre de 2017, decantando que el deber de información es ineludible; que este tema a nivel procesal se rige por condiciones probatorias que le imponen a la respectiva administradora de pensiones acreditar en el juicio que en cada caso concreto sí adelantó la respectiva asesoría; que el primer acto de voluntad es el que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se hubieren brindado a los asegurados, después de haber tomado la decisión inicial; que la simple suscripción de un formulario de traslado no denota un proceso serio y cabal de asesoría; no es necesario ni que el asegurado se encuentra ad portas de consolidar el derecho pensional, ni que necesariamente tenga que tener el beneficio del régimen de transición, y; que la prescripción no opera en asuntos en los que se encuentra involucrada la formación del derecho a la pensión.

Es importante destacar que, el primer acto de voluntad que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de

régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se le brinden al asegurado, después de haber tomado la decisión inicial, o por el hecho de que el asegurado se haya trasladado incluso entre varias administradoras pertenecientes al régimen de ahorro individual con solidaridad, ya que *“la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad, por lo que un dato será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad”* (Sentencia CSJ SL 1688 de mayo de 2019).

A partir de lo anterior, pasa a desatarse la alzada conforme al...

CASO CONCRETO

Sea lo primero reseñar, que conforme a la prueba documental obrante a folios 13 y siguientes del archivo PDF N° 06 que contiene la respuesta de Colpensiones, se advierte que la señora GLORIA LILIANA GÁLVEZ LONDOÑO, se afilió al régimen de prima media con prestación definida administrado por el entonces Instituto de los Seguros Sociales desde el 24 de junio de 1994, a través del empleador “INVERSIONES CARLOS A”; al poco tiempo se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, desde el 24 de agosto de 1995 a través de la AFP COLMENA, misma que en virtud de cesiones y fusiones empresariales paso a ser PROTECCIÓN S.A., fondo donde permanece actualmente (fls.36 y 37 del archivo PDF N° 07).

Ahora, revisadas en detalle las consideraciones de la A quo para arribar a la decisión de declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional de la actora, esta Sala encuentra que las mismas se encuentran ajustadas al sentido de la jurisprudencia nacional, y consultan las particularidades del caso, teniendo en cuenta que la AFP convocada a juicio (PROTECCIÓN S.A.) no alcanzó a probar haberle brindado asesoría a la actora con suficiencia en su proceso de traslado, en el momento en que lo atendió para afiliarla.

Ahora, como lo ha decantado pacíficamente la jurisprudencia del órgano de cierre (Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008, SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del

27 de septiembre de 2017, y SL 17.595 del 18 de octubre de 2017), es claro que la firma del formulario de afiliación no es una prueba certera de que hubiere existido un verdadero cumplimiento por parte del fondo privado. La simple firma del formulario por parte del asegurado no puede tenerse como una prueba de que se le haya informado a cabalidad de todos los pormenores que le implicaban el cambio de régimen, y por ello el acto jurídico terminó afectado en su eficacia.

Es importante destacar que el derecho a la libre elección de régimen pensional contenido en la Ley 100 de 1993 en el marco del derecho a la seguridad social no riñe con las disposiciones legales que contemplan la exigencia del formulario, debiéndose entender que, más allá de la documentación formal, existe un sustrato material directamente relacionado con los derechos fundamentales que exige que el asegurado tenga una completa asesoría en su proceso de traslado de régimen pensional, la cual coloca a la respectiva administradora en el pleno del cumplimiento de sus obligaciones profesionales en ese sentido, bajo la dinámica del *“buen consejo”*.

En consecuencia, **se confirmará** la sentencia de primera instancia, al haber declarado la ineficacia del traslado de la señora GLORIA LILIANA GÁLVEZ LONDOÑO dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad.

Bajo el anterior escenario, la situación pensional de la demandante, retorna al mismo estado en que se encontraba antes de suscribir el acto ineficaz de traslado a la AFP COLMENA hoy PROTECCIÓN SA., esto es, se encuentra válidamente afiliada al RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA, administrado en la actualidad por COLPENSIONES.

El tema de las devoluciones económicas es pertinente revisarlo en virtud de la competencia en Grado Jurisdiccional de Consulta de que dispone este colegiado, que impone la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad pública codemandada que será quien asuma las futuras prestaciones económicas de la seguridad social que deban pagársele a la demandante. A su vez, este tema constituye punto de disenso en la apelación de PROTECCIÓN S.A., oponiéndose a dicha orden, aduciendo razones de correcta administración

de la cuenta de ahorro individual, generación significativa de rendimientos y enriquecimiento sin causa en favor de COLPENSIONES.

Esta sala encuentra que no le asiste razón al apoderado judicial de PROTECCIÓN S.A., al pretender que se revoque la orden de traslado de las cuotas de administración y primas previsionales, en tanto a la entidad pública debe garantizársele la integridad de la cotización sin descuento alguno, ya que será quien reciba la afiliación del asegurado y para todos los efectos legales lo tenga afiliado al fondo público sin solución de continuidad. No puede perderse de vista que COLPENSIONES es la entidad que a futuro deberá asumir el pago de las prestaciones de la seguridad social que llegue a causar, y deberá asumir la afiliación sin solución de continuidad en el tiempo.

Los efectos de la ineficacia se traducen en el hecho de que las cosas deban retornar al estado anterior, resultando intrascendente que la actora haya percibido unos rendimientos financieros a partir de la gestión administrativa de PROTECCIÓN S.A., en tanto COLPENSIONES no tiene por qué ver diezmada la cotización, ya que los referidos descuentos también existen en el régimen de prima media con prestación definida, y no deben ser realizados por PROTECCIÓN S.A., sino por COLPENSIONES, que es donde siempre ha permanecido afiliado el actor.

Ahora, frente a las manifestaciones de PROTECCIÓN S.A., quien estima que los descuentos por administración cuentan con autorización legal establecida por el legislador en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, es preciso destacar que esa razón no resulta suficiente para justificar las referidas deducciones en un acto jurídico que adolece de eficacia y no nació a la vida jurídica. Es claro que la referida autorización legal de descuento opera en condiciones ordinarias, y no en casos en los que la administradora de pensiones incurrió a faltas y omisiones en su deber de información, asesoría y buen consejo.

Tampoco le asiste razón al apoderado judicial de PROTECCIÓN S.A. en el sentido que la orden de devolución y traslado de los descuentos esté generando un enriquecimiento sin causa en favor de COLPENSIONES, ya que, precisamente, el hecho de los referidos descuentos existan en ambos

regímenes constituye una razón de peso para que se entienda que la administradora del régimen de prima media con prestación definida no pueda perder la posibilidad de hacer dichos descuentos, situación que tampoco puede ser entendida como un perjuicio para el fondo privado de pensiones, como equivocadamente lo asimila la AFP accionada en su recurso de alzada, pues no es más que una consecuencia jurídica propia de cuando se retrotraen las cosas a su estado anterior.

Ahora, el hecho de que la actora haya tenido cobertura frente a los riesgos de invalidez y sobrevivencia, a partir del pago de las primas previsionales, no resulta ser un tema oponible a COLPENSIONES. Resulta claro que quien dio lugar a la ineficacia fue PROTECCIÓN S.A. a partir de sus propias omisiones, luego deberá responder de su propio patrimonio con la devolución en los términos ordenada, como quiera que dicho retronó económico no opera a condición de que la AFP esté posibilitada en recuperar las primas previsionales pagadas.

Con relación a la importancia del retorno económico integral, resulta oportuno citar el reciente criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien, en sentencia del 29 de julio de 2020, SL 2877, Radicación 78.667, MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, ha recordado que *“la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida...”*.

En lo que tiene que ver con el argumento merced al cual el apoderado judicial de PROTECCIÓN S.A. solicita se declare la prescripción de las ordenes de devolución, al tratarse de sumas que no tienen por destino financiar la pensión de vejez del actor, tales planteamientos no resultan de recibo, teniendo en cuenta que dicha obligación está surgiendo con la declaración judicial de ineficacia, lo cual comporta la imposibilidad de que hayan transcurrido los términos de la prescripción extintiva para que pueda hablarse de la extinción de la obligación.

Por último, considera la Sala que la orden de devolución indexada de los conceptos relativos a cuotas de administración, primas previsionales, y fondo de garantía de pensión mínima con cargo a sus propios recursos y dentro de un término de 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, se encuentra acorde al criterio jurisprudencial frente el tema de la actualización monetaria, reiterado recientemente por la Sala de Casación laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en sentencias SL3202, SL3709, SL3710 y SL3769 de 2021, donde se ha mostrado la importancia de actualizar estos conceptos al momento de producirse su devolución, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, criterio que acoge esta Colegiatura.

Y también se encuentra acertada la ordene de devolver debidamente discriminados en lo relativo a los ciclos de cotización, e ingresos base de cotización, para con ello facilitar el cargue de información y la actualización de la historia laboral de la demandante, quien ha de entenderse válidamente afiliada y sin solución de continuidad en el régimen de prima media con prestación definida.

Costas procesales en segunda instancia.

Teniendo en cuenta que la AFP PROTECCIÓN S.A., fue vencida en el recurso de alzada, deberá pagar costas procesales de segunda instancia a la señora GLORIA LILIANA GÁLVEZ LONDOÑO, tal y como lo dispone el art. 365 del CGP, y como agencias en derecho se fija la suma de \$1.000.000 equivalente a 1 SMLMV para el año 2022.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR sentencia objeto de apelación y consulta proferida por el JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN de fecha 25 de mayo de 2022, de conformidad a lo expuesto.

SEGUNDO: CONDENAR en costas procesales de segunda instancia a la AFP PROTECCIÓN S.A., y en favor de la señora GLORIA LILIANA GÁLVEZ LONDOÑO, y como agencias en derecho se fija la suma de \$1.000.000 equivalente a 1 SMLMV para el año 2022.

TERCERO: En su oportunidad procesal, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

CUARTO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada